

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 2º Juzgado de Letras de Iquique
CAUSA ROL	: C-361-2019
CARATULADO	: ACUÑA VISCAY MARCELA Y OTROS / AGUAS DEL
ALTIPLANO S A	

Iquique, cinco de Julio de dos mil veintitrés

VISTO:

A folio 1, y subsanada a folio 22, comparecen don **MAURICIO HENRÍQUEZ BARRAZA** y don **ANGIELLO CORDANO CARRIZO**, abogados, en representación, de doña **MARCELA ACUÑA VISCAY**, empleada, casada, cedula identidad N°10.050.389-1, y de don **ALEJANDRO BURGOS GENERAL**, casado, taxista, cedula identidad N°11.652.636-0 , todos domiciliados para estos efectos en calle San Martin N°255 Oficina 94 Edificio Empresarial, comuna de Iquique, quienes interponen demanda de Indemnización de Perjuicios en contra de **AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**, Rut: 76.215.634-2, persona jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por don **CHRISTIAN SAYEL BARAHONA RUBIO**, desconozco profesión u oficio, o quien en derecho represente a la persona jurídica precitada, domiciliados en calle Esmeralda N° 340 de la ciudad de Iquique.

Expone que la demandante doña Marcela Acuña, es dueña de la propiedad ubicada en Calle 3 N°3977, que corresponde al sitio N° 23 de la manzana D, del Conjunto Habitacional Estrella del Norte I Etapa, de la comuna de Alto Hospicio, que habitaba junto al otro demandante don Alejandro Burgos General y su grupo familiar desde el año 2006.

Hace presente que durante los años 2007 y 2010, los demandantes tuvieron problemas de matriz, que se tradujeron en una serie de filtraciones y escurrimientos de agua frente a la altura de su domicilio, luego durante el año 2011 comenzaron a sentir malos olores en la entrada del inmueble y que estos provenían del alcantarillado, el cual es compartido con los vecinos, llamando a la demandada a fin de que se encontrara una solución definitiva a la situación, añade que personal de la demandada se apersona al domicilio concluyendo que



la obstrucción de las cañerías y matrices se debía a la existencia de basura, sin embargo al practicar el arreglo, se verifica que el problema se debía a una ruptura de cañería del medidor, hecho que trajo como consecuencia un asentamiento de la cámara de su inmueble.

Posteriormente con fecha 26 de abril de 2018 nuevamente se produjo una rotura de matriz que trajo como consecuencia el colapso del medidor, provocándose una serie de daños al inmueble, tales como grietas; hundimiento; hinchazón de marcos de puertas, ventanas y pisos; trizaduras de pared etc., lo que ha generado una serie de socavones que han ocasionados daños estructurales en el inmueble.

Hace presente que los trabajos realizados por la demandada no han traído ningún resultado positivo para los demandantes, señalan que durante el año 2019, nuevamente se presentaron problemas en el arranque, produciéndose una fuga de agua en el primer varal del medidor, el cual se encuentra ubicado en el antejardín de la vivienda de propiedad de la demandante doña Marcela Acuña, el cual no registra consumo.

Añade que con fecha 4 de mayo de 2018, personal de la demandada concurrió al inmueble, con el objeto de rellenar un socavón existente al interior de la propiedad.

En cuanto a la estructura material del inmueble, presenta severas grietas en muros interiores y exteriores, la fachada esta deformada por el terreno, sector de la cámara de inspección se encuentra deprimido, asimismo existe un asentamiento diferencial del suelo, causante del problema que afecta a la estructura, generado por el socavamiento del terreno, el que ha ido perdiendo capacidad de soporte a raíz de la disolución de sales, y que la inestabilidad del muro medianero podría generar su colapso en cualquier momento, teniendo presente el grave riesgo para la integridad física de los actores, los que viven con la angustia y preocupación ante el riesgo de colapso de la propiedad, la cual se encuentra declarada como inhabitable, según consta en certificado de daños.



Señalan que los demandantes enviaron a la demandada una carta con fecha 22 de mayo de 2018, poniéndole en conocimiento los hechos, solicitándoles se hicieran responsables de los daños alegados, respondiendo con fecha 24 de mayo que lamentaban los hechos ocurridos pero que estos eran ajenos a Aguas del Altiplano y que se había actuado dentro de las 2 horas desde producido el incidente conforme los estándares de atención, además que los daños observados se atribuyen al tipo de terreno por su alta concentración salina, añadiendo que este tipo de eventos, por su naturaleza fortuita y dadas las características del terreno existente, propicia este tipo de daños.

De manera que la afirmación que expone la demandada es del todo falsa y solo busca excusarse de los perjuicios ocasionados producto de su negligencia e inoperancia, señala que antes de las constantes filtraciones de aguas y roturas de matriz, el suelo sobre el cual se construyó la propiedad no sufrió daño de ninguna naturaleza, ya que si fuere verdad lo expuesto por la demandada, todas las viviendas y construcciones de la comuna de Alto Hospicio estarían hundidas, en ruinas y claramente no se iniciarían proyectos inmobiliarios.

En cuanto a la calidad del suelo salino, no puede considerarse como caso fortuito al revestir las características de desconocidos e imprevistos, descartándose cualquier defensa de la demandada en este sentido.

Indica que el demandante don Alejandro Burgos General, interpuso reclamo N° 20355583 con fecha 9 de Mayo de 2018 ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), la que con fecha 16 de octubre responde que dicha superintendencia carecía de facultades legales para hacerse parte en reclamaciones de tipo compensatorio entre los clientes y la empresa demandada, toda vez que estas deben ser acordadas entre las partes y de no alcanzarse acuerdo satisfactorio, representarlas ante la justicia.



Al mismo tiempo la SISS, informó que entre noviembre de 2015 y el 15 de septiembre de 2018, la infraestructura sanitaria existente en la Población Estrella del Norte de la ciudad de Alto Hospicio, se ha visto afectada por 96 anomalías, de ellas 94 afectaron a las redes públicas y 2 correspondieron a instalaciones interiores, agrega que las obligaciones de operación, mantención y renovación del prestador se circunscriben a las redes públicas y no puede este excusarse de ellas. Además indica que de los 94 casos, en 34 de ellos, la prestadora no ajustó su actuar al nivel de calidad de atención comprometido en su decreto tarifario, que dice relación con los tiempos máximos de llegada al evento (2 horas), tiempo máximo de resolución de la emergencia (5 o 6 horas) y el tiempo máximo para brindar una solución definitiva (2 días).

Y que dentro del porcentaje de incumplimiento se incluyen las emergencias producidas en instalaciones interiores, no obstante el prestador no tiene responsabilidad sobre las mismas, sin embargo se les considera porque la calificación de la instalación es posterior a la llegada al lugar de la emergencia.

Arguye que una vez verificadas las emergencias que afectaron a la propiedad sub lite, la empresa no accionó en los tiempos comprometidos, de manera que la demandada ha incurrido en lo que se denomina como culpa contra legalidad, que se traduce en la responsabilidad en la cual se incurre a consecuencia de una infracción o transgresión a la normativa cuyo resultado trae aparejado perjuicios.

Expone que la demandada debió haber tomado las medidas urgentes al momento de descubrirse las primeras roturas de matriz de los años 2007 y 2010, que por lo demás ocurrieron en calle Delaware frente a la propiedad sub lite, y que durante los años 2013 y 2016 se realizaron trabajos de intervención al medidor del inmueble, no obteniendo solución alguna frente a los problemas de filtración de agua potable, ni tampoco se tomaron las medidas en el año 2019, cuando se produjo la fuga del primer vanal del medidor del inmueble,



de manera que han sido situaciones que se han ido repitiendo en el tiempo.

Cita y reproduce los artículos 2314, 2284, 2316, y 2329 del Código Civil, de los cuales se extraen los requisitos de procedencia de la responsabilidad extracontractual de la demandada.

En cuanto al ilícito civil, señala que el artículo 2329 del Código Civil establece una suerte de presunción de responsabilidad que en general reconoce dos grupos de casos: las actividades particularmente peligrosas y los casos en que el daño prima facie, ha sido causado con negligencia, y que en este caso consiste en que la empresa a la fecha de la fuga en el primer varal del medidor, mantenía tuberías defectuosas o técnicamente deficientes para evitar problemas en el arranque, lo que en definitiva produjo los daños irreparables descritos, lo que configura la presunción de culpa y la relación causal entre la omisión negligente y el daño, el cual habría podido ser evitable si la empresa, hubiere hecho lo necesario para impedirlo, que es justamente en donde radica su responsabilidad.

Indica que al provocarse una filtración de agua por rompimiento en los sistemas de arranques del medidor o rotura de matriz, debe la empresa demandada dar cumplimiento cabal a la obligación de reparar todos y cada uno de los daños ocasionados.

Cita y reproduce el artículo 36 bis de la Ley de Servicios Sanitarios y artículo 122 del Reglamento, normas que dicen relación con que la afectación de las redes públicas, su mantención y renovación corresponden a la demandada, y que ha existido una infracción a lo preceptuado en el Decreto Tarifario en cuanto a los tiempos máximos de llegada y de resolución de la emergencia en lo referente a las instalaciones interiores (colapso arranque de medidor), configurándose la responsabilidad de Aguas del Altiplano en los hechos que dan lugar a la demanda de autos.

Señala que debe entenderse por redes públicas de distribución de agua potable, de lo que se desprende que la matriz y ductos se encasillan dentro de dicha definición.



En cuanto a los perjuicios sufridos, corresponden a daños directos e indirectos, causados a consecuencia del actuar negligente de la demandada, que se traducen principalmente en el asentamiento de terreno, daños en la condición estructural de la propiedad sub lite, asentamiento diferencial del suelo (superficie de la propiedad), trizaduras de pared y en general, desnivel de la propiedad, que han generado un sentimiento de pena, tristeza, e impotencia al ver la propiedad en la actualidad inhabitable.

Asimismo señalan que existe una desvaloración total del inmueble en atención a su estado de inhabitabilidad y peligro, puesto que en cualquier momento podría ceder su estructura, pudiendo afectar la integridad física de los demandantes, así como el estado emocional de los actores, el que se ha mantenido en el tiempo, no logrando mitigar el desánimo, angustia y desesperación al preocuparse que en cualquier momento su hogar pueda colapsar.

De manera que son aplicables en la especie los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, ya que la negligencia de la demandada fue detonante de los daños ocasionados con la rotura de la matriz, lo que en definitiva redunda en los cuantiosos daños sufridos, demandando los siguientes conceptos:

1.- Daño emergente: el inmueble sufrió daños debido a las filtraciones ocurridas en calle Delaware de la comuna de Alto Hospicio (frente a la propiedad de los demandantes), que dicen relación con asentamientos diferenciales de terreno, trizaduras en la pared, desnivel, humedad, lo que ha generado una serie de socavones, los que progresivamente han ido provocando daños estructurales en la propiedad, lo que consta a través del certificado de inhabitabilidad, situación en la que viven sus representados desde hace varios años, y la única manera de reparar la propiedad destruida por las filtraciones de aguas y rotura de medidores, es a través de la demolición de la vivienda, reparando el suelo donde se emplaza el inmueble, es por esto que la demandante doña Marcela Acuña Viscay, dueña del inmueble demanda a título de daño emergente la suma de



\$80.000.000.- (ochenta millones de pesos) o lo que este tribunal estime conforme a derecho y al mérito de los antecedentes aportados al proceso.

2.- Desvalorización comercial del inmueble: atendido a que la propiedad ha sido dañada y afectada en su estructura, lo que traído como consecuencia una rebaja de su avalúo comercial, esto en virtud de la reparación integral del daño, consagrado en el artículo 2329 del Código Civil, es por esto que la demandante doña Marcela Acuña Viscay demanda la suma de \$15.000.000.- (quince millones de pesos) o lo que este tribunal estime conforme a derecho y al mérito autos.

3.- Daño moral: el cual se relaciona con el deterioro actual de la propiedad, principalmente su destrucción progresiva por causas imputables a la demandada, lo cual ha ocasionado en los demandantes sentimientos de tristeza y angustia, especialmente un gran desgaste físico y emocional, producto de la constante preocupación de riesgo de colapso de la propiedad, demandando la suma de \$100.000.000.- (cien millones de pesos), es decir \$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos) para cada uno de los actores, o el monto indemnizatorio que este tribunal se sirva fijar de acuerdo a derecho.

En cuanto a la relación de causalidad, la conducta desplegada por la demandada configura un ilícito civil, ya que el colapso de la matriz de agua y posterior filtración de agua y rotura de medidor, no es resultado del caso fortuito o fuerza mayor, sino que se debe efectivamente a un hecho negligente de la demandada que trajo como consecuencia la ocurrencia y existencia de los daños sufridos en la propiedad sub lite. Reproduce jurisprudencia al efecto.

Cita y reproduce el artículo 34 de la Ley General de Servicios Sanitarios, y normas atinentes a la materia, que en síntesis señalan que las empresas de servicios sanitarios tienen el deber de mantención permanente, preventiva, operativa, adecuada y oportuna de la red pública de distribución y recolección de aguas, con el objeto de evitar un perjuicio para la comunidad a la cual van dirigidas sus



prestaciones, debiendo considerar en su instalación, y consecuentemente, en su mantención, la especial característica de encontrarse emplazadas las redes y tuberías en suelo salino de estructura colapsable, no dando la demandada cumplimiento a su deber de diligencia y cuidado que le era exigible, adoptando las medidas de mantención pertinentes y anticipadas, evitando las filtraciones de agua que provocaron socavones, asentamiento de terreno y en general una serie de daños en el inmueble sub lite.

Por lo tanto, al mérito de lo expuesto y previas normas que indica, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en contra de **AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**, representada legalmente por don **CHRISTIAN SAYEL BARAHONA RUBIO**, ya individualizados, acogerla a tramitación y en definitiva declarar:

1.- Que la demandada sea condenada al pago de una indemnización total de **\$195.000.000.-** (Ciento noventa y cinco millones de pesos) o lo que este tribunal estime conforme a derecho, cantidad que se desglosa de la siguiente forma:

a) Daño emergente: por la suma de **\$80.000.000.-** (ochenta millones de pesos).

b) Desvalorización comercial del inmueble: por la suma de **\$15.000.000.-** (quince millones de pesos).

c) Daño moral: por la suma de **\$100.000.000.-** (Cien millones de pesos), desglosados de la siguiente manera: a favor de doña Marcela Acuña Viscay la suma de \$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos) y para don Alejandro Burgos General la suma de \$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos).

2.- Que el monto indemnizatorio total que fije el fallo, sea reajustado desde la fecha de los hechos denunciados, es decir los sucedidos desde noviembre de 2015, 26 de abril y 15 septiembre de 2018 hasta la fecha de pago efectivo.

3.- Que la demandada sea condenada al pago de las costas.

A folio 24, comparecen don Patricio Torres Velozo y don Edwin Riffo González, abogados, en representación de la demandada,



quienes contestan la demanda, solicitando el total rechazo de ésta, con costas.

Niegan y controvierten todas y cada una de las pretensiones y peticiones de los demandantes, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, señalan que será carga de la contraria probar fehacientemente todos y cada uno de los hechos en que funda su demanda, la forma, fecha y circunstancias en que éstos ocurrieron, la culpabilidad de la demandada, así como también la relación causal de los mismos con los supuestos daños descritos en el libelo pretensor.

En primer término, alega la improcedencia del estatuto de responsabilidad extracontractual invocada por la contraria, por corresponder lo expuesto en la demanda a cuestiones de responsabilidad contractual, existiendo un contrato de prestación de servicios sanitarios, contrato que es bilateral, conmutativo y oneroso, razón por la cual la responsabilidad que le cabría a la demandada, dice relación sólo con los daños directos provenientes de su culpa leve, excluyendo de esta manera cualquier responsabilidad por daños indirectos y/o derivados de otro tipo de culpa, y que no puede considerarse que por el solo hecho de encontrarse el contenido del contrato de prestación de servicios sanitarios determinado por disposiciones legales y reglamentarias, deje de existir entre los usuarios un vínculo de carácter contractual, puesto que esa sola circunstancia no cambia la naturaleza jurídica del vínculo existente entre ambos.

Teniendo en consideración lo dispuesto en la Ley General de Servicios Sanitarios, D.F.L. MOP N°382/88, Decreto Supremo número 1199, normas que disponen expresamente que se trata de una relación contractual, que las tarifas de los servicios sanitarios están sometidas a regulación en el Decreto con Fuerza de Ley número 70, de Obras Públicas, de 1988, la que se aplica a usuarios finales, sostiene que la responsabilidad reclamada debió serlo bajo el estatuto de la responsabilidad contractual.



Expone que el precio o tarifa que mes a mes se cobra a los usuarios finales por el contrato de prestación de servicios sanitarios, comprende producción de agua potable, distribución de agua potable, recolección de aguas servidas y disposición de aguas servidas, las que deben considerarse como un todo para minimizar los costos de largo plazo de proveer el servicio sanitario, normas que aplicadas en su conjunto, relacionada y congruentemente, determinan que la relación entre la demandante, en su calidad de usuaria final y la demandada es contractual, que si bien de una relación contractual pueden surgir hechos que den origen a responsabilidad extracontractual, solo es posible en la medida que estos hechos no tengan relación con el contrato que las liga, siendo incompatibles ambos tipos de responsabilidades, citando doctrina al respecto.

En segundo término alega, la ausencia de culpa de la demandada, indica que para el caso que se considere que la responsabilidad reclamada pudiese ser extracontractual, el Código Civil sigue la teoría clásica o subjetiva, fundada en la culpa del autor, la cual debe ser probada por la demandante conforme el artículo 1698 del Código Civil, sin embargo la demandada no ha sido negligente en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la prestación de servicios sanitarios que la liga para con los demandantes, sino por el contrario, ha cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

Asimismo no describen los demandantes en forma alguna cuál o cuáles serían las acciones u omisiones negligentes o culpables que constituirían una falta al deber de mantención permanente, preventivo, operativo, adecuado y oportuno de la red pública de alcantarillado y/o en la de distribución y recolección de aguas.

Señala que debe tenerse presente que el simple hecho de que ocurran situaciones como las que supuestamente afectaron a los demandantes, no puede constituir per se, una circunstancia suficiente para concluir que ha existido falta de mantención de la red de alcantarillado y/o de agua potable, desde el momento que, no existe en nuestra legislación norma alguna que exija un estándar infalible de



la red pública, ni tampoco existe en este sentido norma alguna que establezca algún tipo de responsabilidad objetiva al respecto.

Cita y reproduce artículo 122 del Reglamento de Servicios Sanitarios, el cual obliga a la demandada a contar con un procedimiento para atender las emergencias, y si la legislación sectorial establece la necesidad, es precisamente porque el legislador ha reconocido implícitamente la posibilidad de que la red pueda fallar, y que esto ocurra, no puede conllevar a la conclusión inmediata y absoluta, como lo ha hecho la parte demandante, de que ha existido culpa o negligencia.

Señala que existen ciertas situaciones en las cuales los problemas que presenta la red de agua potable y de recolección de aguas servidas, ni siquiera son producidos por falta de mantención de la demandada, sino que por conductas imprudentes de los usuarios, cuestión que excluye la responsabilidad demandada, por ejemplo cuando se señaló en la demanda que la obstrucción de las cañerías y matrices se debía a la existencia de basura y pañales en las mismas, así también lo reconoce el artículo 99 del Reglamento de las Concesiones Sanitarias de Producción y Distribución de Agua Potable y Recolección y Disposición de Aguas Servidas, el cual reproduce.

Indica que la contraria no puede colegir que, por el simple hecho de existir una filtración, esta se deba a una acción culposa o negligente de la demandada, ya que es la propia ley la que reconoce que las filtraciones provenientes de redes públicas, pueden tener su origen en mal uso de las instalaciones por los usuarios. Además es de conocimiento público que gran parte de la comuna de Alto Hospicio, se encuentra emplazada en un suelo de alta concentración salina, no siendo su excepción la superficie sobre la cual se encuentra emplazada la propiedad de la parte demandante, lo que tiene importancia, por cuanto el hecho que ha causado el daño reclamado por los actores no son las filtraciones de agua potable desde la red pública, sino que la deficiente calidad de la construcción de las



viviendas en la comuna de Alto Hospicio. Cita y reproduce doctrina al efecto.

Expone que no es que no existan filtraciones ocasionales de agua, sino que se debe a que en la comuna de Alto Hospicio existen edificaciones realizadas con estándares de construcción para suelo salino y otras no, cuestión que no puede ser imputable a la demandada.

Por tanto, señala que la contraria no solo debe acreditar la existencia de agua en el lugar proveniente de las supuestas roturas de matriz, y que estas roturas se debieron a falta de mantención de las redes, con exclusión de cualquier conducta de terceros, sino que además que la construcción de la vivienda supuestamente afectada fue realizada bajo estándares constructivos aptos para el suelo salino, pues de no ser así, la culpa en el daño estructural no es de la demandada, sino que del constructor según lo dispuesto en los artículos 2003 del Código Civil y 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcción.

En tercer término, conjuntamente con la excepción y alegación o defensa expuesta precedentemente, alegan la inexistencia de responsabilidad objetiva en la especie, ya que no existe en nuestro ordenamiento norma alguna que establezca responsabilidad objetiva de su representada, en un caso como el que describe la demanda de autos, puesto que la responsabilidad extracontractual que se encuentra contenida en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil es de carácter subjetiva, por tal razón, la víctima de un daño debe acreditar la existencia del mismo y además que existe un vínculo de causa a efecto entre la actividad incriminada y el daño alegado, siendo obligación de los demandantes acreditar que el origen de la rotura de la matriz sería su falta de mantención, no bastando al respecto acreditar que ésta en determinado momento se rompió.

En cuarto término, conjuntamente con las excepciones y alegaciones o defensas expuestas precedentemente, alega el cumplimiento cabal de las obligaciones de mantención. Ha de tenerse



presente a este respecto que el deber de mantención de la demandada se cumple:

En primer lugar, con la utilización de materiales de alta resistencia con una durabilidad según manual del fabricante, de 50 años, de manera que toda la red del lugar en que habrían ocurridos los hechos vagamente descritos, se encuentran dentro del rango de durabilidad, sin que exista la obligación legal y/o racional de haberla reemplazado antes de la fecha.

En segundo lugar, el deber de mantención se encuentra establecido en los “Programas de mantención de la Red Sanitaria”, elaborados por la demandada e informados a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, negando categóricamente haber incumplido en la especie, de manera que la contraria deberá acreditar en que parte y de qué forma se habrían incumplido dichos programas de mantención.

En tercer lugar, cita el artículo 122 del Decreto Supremo 1199, el cual obliga a la demandada a contar con un procedimiento para atender las emergencias.

Refiere que la parte demandante no expone en el libelo de qué forma se habrían incumplido los procedimientos de atención de emergencias, limitándose a entenderlos como no cumplidos por el sólo hecho de existir filtraciones en el lugar, sin siquiera aportar antecedentes respecto de si las supuestas fallas son reiterativas o se trata de problemas distintos en la red.

Expone que la demandada ha cumplido con todas las instrucciones de la autoridad y demás exigencias que contempla la norma, y que las instalaciones sanitarias por la demandada jamás han sufrido colapso como consecuencia de estar instaladas en suelo salino, mas allá de filtraciones ocasionales causadas en su mayoría por mala utilización o intervención de terceros, sin que exista reparo a la fecha de la Superintendencia de Servicios Sanitarios relacionados a mala calidad de la infraestructura emplazada en el sector, lo que demuestra que los daños se deben única y exclusivamente a las deficiencias en la construcción de la vivienda.



En quinto término, opone la excepción de inexistencia de relación de causalidad, por cuanto la parte demandante presenta una relación confusa de los hechos, que dificulta de sobre manera establecer la relación causal existente entre el supuesto actuar culpable de su parte y los daños alegados. La contraria refiere la ocurrencia de hechos a contar del año 2007, para luego pasar al año 2010, 2011, 2018 y 2019, indicando una serie de eventos aislados como causantes del daño, sin ningún detalle de la relación de causalidad entre estos eventos aislados y el daño producido, de manera que resulta imposible establecer cuál de estos eventos produjo el daño o si fueron todos en su conjunto.

La contraria imputa a la demandada como hecho causante del daño, la falta de mantención de las redes de agua potable, pero no indica cómo se habría incumplido dicha obligación.

En sexto término, opone la excepción de falta de legitimación pasiva de la demandada, atendido a que las construcciones que se levantan en la comuna de Alto Hospicio deben responder a estándares especiales de constructibilidad para evitar sufrir daños producto del suelo en que se emplazan, y que por tanto, si la parte demandante indica que su inmueble se ha visto afectado producto del escurrimiento de aguas, quiere decir que no se encuentra dentro de dichos estándares, de manera que los actores deben dirigir su acción, en contra de aquel que construyó el inmueble.

En séptimo término, alega la sobrevaloración de los daños demandados, en cuanto al daño moral solo se limita a señalar su monto sin describir la forma en que ha determinado el quantum de la lesión extrapatrimonial supuestamente sufrida por los demandantes, cita y reproduce jurisprudencia y doctrina al efecto. Por consiguiente, el planteamiento de la parte demandante sobre el daño moral supuestamente sufrido es absolutamente inaceptable y a la luz de los antecedentes aportados, no puede acogerse, pues no tiene ninguna justificación racional y es manifiestamente exagerado.



Por otro lado en cuanto al daño emergente demandado, resulta evidente su sobrevaloración, dado que se funda en la supuesta condición de inhabitable que tendría el inmueble, sin embargo basta revisar el certificado de avalúo fiscal del mismo, para apreciar que el valor es muy inferior a la suma demandada como tal. Indica que la indemnización compensatoria, como la solicitada en estos autos, en ningún caso puede tener fines de lucro para la contraria, debiendo limitarse a reparar los daños que pudiera haber sufrido el inmueble, en la medida que se cumplan los demás requisitos legales para ello.

Por último alega en subsidio de las excepciones anteriormente expuestas, y para el caso improbable que se considere que la responsabilidad demandada es extracontractual y que se cumplen con los requisitos de ésta, la prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, ya que de la lectura de la demanda los hechos relatados de manera aislada y no continuos abarcan desde el año 2007 hasta el 2019, y además hace referencia a daños estructurales en el año 2011.

A folio 28, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, reiterando todos los antecedentes de hecho y derecho vertidos en la demanda.

A folio 32, la parte demandada evacuó el trámite de la réplica, reiterando todos los antecedentes de hecho y derecho vertidos en la contestación de la demanda.

A folio 40, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, con la asistencia de ambas partes, llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce.

A folio 38, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Modificada parcialmente a folio 61.

A folio 167, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FGXXGDQXWF

EN CUANTO A LA TACHA OPUESTA POR LA PARTE DEMANDADA RESPECTO DEL TESTIGO DON JOSE RODRIGO REBOLLEDO RECABAL.

PRIMERO: Que a folio 96, la parte demandada formula tachas, fundada en la causal de inhabilidad del artículo 358 N°7 del Código de Procedimiento Civil, indicando que el testigo es inhábil para declarar, desde el momento en que se desprende de sus propios dichos, que existe entre él y la persona que lo presenta, un vínculo de íntima amistad que se manifiesta entre otras cosas, en visitas recíprocas de carácter personal, de comunicación recíproca y demás circunstancias que el testigo describe y que no son propias de 2 personas que no se encuentran vinculadas por una amistad, lo que le resta imparcialidad.

SEGUNDO: Que la parte demandante, evacua el traslado conferido solicitando su rechazo, indicando que de la declaración del testigo no hay una amistad íntima entre él y quien lo presenta, que las visitas a su domicilio no fueron más de 5 en más de 6 años en que fueron apoderados del mismo colegio, que las visitas se dieron en un contexto de actividades grupales y escolares, que en ningún momento existieron visitas a ambos domicilios en el contexto de compartir con un grado de amistad íntimo, en ningún momento hubo comunicación recíproca en términos de problemas personales íntimos, sino más bien de carácter general y público, por lo tanto en ningún sentido aquello le resta imparcialidad para declarar.

TERCERO: Que, como reiteradamente lo ha resuelto la jurisprudencia, el concepto de “amistad íntima” que se exige para legitimar la tachas es más amplio que el de simple amistad, debiendo aquella justificarse por hechos externos, lo que no acontece en estrados, teniendo presente además que los hechos que el articulista invoca no revisten la entidad ni gravedad suficiente exigida por la norma, para tener, con su mérito, por probada la tachas, lo que llevará al rechazo de la tachas como se dirá.

EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DEL ESTATUTO DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL Y EXCEPCIÓN DE



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FGXXXGDQXWF

FALTA DE LEGITIMACION PASIVA OPUESTA POR LA DEMANDADA.

CUARTO: Que, para la adecuada resolución del asunto, con miras a despejar la normativa aplicable, resulta útil esclarecer de manera preliminar, el tipo de responsabilidad que regula los hechos denunciados en la demanda, dado que aquella de naturaleza extracontractual invocada por los actores, ha sido debatida por la demandada, alegando la procedencia de la responsabilidad contractual, debiendo, por ende, a su juicio, haberse ejercitado la acción conforme las reglas previstas para la responsabilidad contractual.

QUINTO: Así cabe referirnos al tema de la “conurrencia de responsabilidades”, que se presenta cada vez que un mismo acaecer dañoso, es susceptible de integrar el supuesto de hecho de la responsabilidad contractual y el de la extracontractual, por ejemplo en aquellos casos en que la responsabilidad alegada, emana de una prestación de servicios, o de contratos en que las partes alegan indistintamente la responsabilidad contractual y la extracontractual, o cuando un hecho pueda dar lugar a accionar en forma contractual o extracontractual.

Para resolver este tema existen diversas teorías en la doctrina, entre ellas, la “Teoría de la Opción”, a la que esta sentenciadora adscribe, la cual, según señala María Teresa Alonso Traviesa, en su obra “El Problema de la Concurrencia de Responsabilidades”, *“parte de la base que la responsabilidad convencional y la aquiliana son pretensiones jurídicas distintas y autónomas, que no se excluyen mutuamente, y por lo mismo, pueden concurrir respecto de un caso concreto. De tal forma que la víctima, en los supuestos dañosos ubicados en las “zonas fronterizas”, cuenta con dos acciones para exigir la reparación del daño causado: la derivada del incumplimiento del contrato y la proveniente del principio general de no dañar a otro. El perjudicado, entonces, puede exigir la tutela jurídica por cualquiera de las dos vías, dado que la existencia de la violación de una*



obligación contractual no excluye la procedencia de la acción aquiliana. La única limitación que se le impone es la imposibilidad de ejercerlas simultáneamente, salvo que las incoe conjuntamente mediante la acumulación subsidiaria o alternativa de acciones.

En virtud del principio dispositivo, el actor podrá presentar la pretensión como desee, ya que está facultado para elegir el medio por el cual exigirá la indemnización de los perjuicios, sin embargo, la elección que haga vinculará al juez, que se encuentra sometido a la calificación jurídica hecha por las partes.” (Alonso Traviesa, El Problema de la Concurrencia de Responsabilidades”, ob. Cit. pág. 397).

Por lo anterior, esta Juez estima que resulta perfectamente posible en este caso, accionar en virtud de la responsabilidad extracontractual, basándonos en el vínculo existente entre las partes, no obstante poder la actora, haber accionado bajo el régimen de responsabilidad contractual, de modo que será materia de prueba, el acreditar que el supuesto fáctico en que se apoya la demanda, cumple con los requisitos que hacen procedente el tipo de responsabilidad alegada.

Cabe mencionar que la teoría de la opción ha sido aceptada y recogida por jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, incluso en aquellos casos en que no se trata de hechos de dudosa calificación jurídica, como por sentencia de 26 de enero de 2000, por la que acogió la acción de responsabilidad extracontractual por los daños derivados del incumplimiento de un contrato de promesa de compraventa. (R.D.J., t. XCVII, sc. 1ª, 2000, págs... 36 y ss).

SEXTO: Por su parte, el Decreto N°1199 del Ministerio de Obras Públicas artículo 92, inciso segundo del artículo 5° de la Ley General de Servicios Sanitarios, el artículo 40 de la Ley General de Servicios Sanitarios, Decreto con Fuerza de Ley N°382 de 1988, y el artículo 93 del Reglamento, definen cada uno de los elementos, cuyo mantenimiento es de cargo del propietario del inmueble, indicando en el artículo 53 letra a), que la Instalación domiciliaria de agua potable,



“son las obras necesarias para dotar de este servicio a un inmueble desde la salida de la llave de paso colocada a continuación del medidor o de los sistemas propios de abastecimiento de agua potable, hasta los artefactos”; en la letra b) Instalación domiciliaria de alcantarillado de aguas servidas, como “las obras necesarias para evacuar las aguas servidas domésticas del inmueble, desde los artefactos hasta la última cámara domiciliaria, inclusive, o hasta los sistemas propios de disposición”. Además, el aludido precepto conceptualiza los elementos que son de responsabilidad del prestador de servicios, manifestando en su letra c), el Arranque de agua potable, como el “tramo de la red pública de distribución, comprendido desde el punto de su conexión a la tubería de distribución hasta la llave de paso colocada después del medidor, inclusive”, y en su letra d), la Unión domiciliaria de alcantarillado, como “el tramo de la red pública de recolección comprendido desde su punto de empalme a la tubería de recolección, hasta la última cámara de inspección domiciliaria exclusive”.

Por esta razón, se advierte que la relación contractual que existe entre la empresa prestadora de servicios y los usuarios, alcanza sólo la unión domiciliaria, y no, como pretende la demandada, las redes públicas de distribución de agua potable, definidas por el referido artículo 53 letra e) como: *“aquellas instalaciones exigidas por la urbanización conforme a la ley, inclusive los arranques de agua potable operadas y administradas por el prestador del servicio público de distribución a las que se conectan las instalaciones domiciliarias de agua potable”*, de la matriz tuberías y alcantarillado, en consecuencia, cualquier relación que se origine con ocasión de éstas entre las partes, detendrá la calidad de responsabilidad extracontractual, consideraciones que llevarán a desestimar la defensa de la demandada de inexistencia del estatuto de la responsabilidad aquiliana.

SEPTIMO: Que, ahora, en cuanto a la alegación de falta de legitimidad pasiva en este procedimiento, introducida por la



demandada, cabe tener especialmente presente que la legitimación no tiene un concepto legal, pero que la misma puede ser comprendida para el demandante o legitimación activa, como "ser la persona que de conformidad con la ley sustancial, está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda", y respecto del demandado o legitimación pasiva, "ser la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante...". Es decir, el demandado debe ser la persona a quien conforme a la ley, corresponde contradecir la pretensión del demandante, o frente a la cual permite la ley que se declare la relación sustancial objeto de la demanda; y el demandante, la persona que según la ley, puede formular las pretensiones de la demanda, aunque el derecho sustancial pretendido por él no exista o corresponda a otra persona.

Por consiguiente, carecen de legitimación activa o pasiva, quienes intervienen en un proceso sin reunir tales calidades.

OCTAVO: En este orden de ideas, la demandada funda su excepción en que la responsabilidad que se persigue en los presentes autos no derivaría de hechos relativos a la prestación de servicio de producción y distribución de agua potable o de recolección y disposición de aguas servidas, sino que del hecho de que el inmueble afectado, se encontraría emplazado en la comuna de Alto Hospicio en un suelo de alta concentración salina, de manera que la generación de socavones no necesariamente ha de deberse a la fuga de agua desde la red pública, sino a que dicho inmueble no habría sido construido con los estándares necesarios para construcciones en suelos salinos, siendo por tanto responsabilidad de quien construyó el inmueble.

Sobre el punto, es necesario tener presente que la responsabilidad perseguida en autos, es aquella que emanaría de la falta de mantenimiento de la matriz ubicada a la altura de la vivienda de los demandantes de Calle 3 N°3977, que corresponde al sitio N° 23 de la manzana D, del Conjunto Habitacional Estrella del Norte I Etapa,



de la comuna de Alto Hospicio, que habría provocado filtraciones, escurrimientos de agua y el colapso del medidor, provocándose una serie de daños al inmueble, causando una serie de socavones, así como como grietas, hundimiento del terreno, hinchazón de marcos de puertas, ventanas y pisos, trizaduras de pared, generando graves daños estructurales en el inmueble de los demandantes.

NOVENO: Que para resolver la presente alegación, debemos tener presente que la concesión de servicios sanitarios, tiene por objeto permitir el establecimiento, construcción y explotación de los servicios públicos destinados a producir y distribuir agua potable, recolectar y disponer de las aguas servidas, conforme se desprende de los artículos 1 N°1 y 7 del D.F.L 382 del año 1988 Ley General de Servicios Sanitarios.

Por su parte, el artículo 34 del referido cuerpo legal señala: *“El prestador estará obligado a controlar permanentemente y a su cargo, la calidad del servicio suministrado, de acuerdo a las normas respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de la entidad normativa y del Ministerio de Salud”*. Luego, en el artículo 40 inciso segundo se dispone: *“El mantenimiento del arranque de agua potable y de la unión domiciliaria de alcantarillado, será ejecutado por el prestador en los términos dispuestos en el decreto con fuerza de ley N° 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas.”*

DECIMO: Que de las normas previamente transcritas, se colige que sobre el concesionario de servicios sanitarios, recae la obligación de control y mantenimiento permanente de la red de agua potable y alcantarillado, que permita la distribución de agua potable y/o la recolección y disposición de las aguas servidas, y siendo el hecho imputado a la demandada, el incumplimiento de su obligación de mantención de la matriz de agua potable, quedando en evidencia el deber de la encartada de cumplir con dicha obligación, no queda sino concluir que las parte demandada se encuentra legitimada para contradecir los acontecimientos denunciados.



Luego, para terminar de configurar la legitimación de la demandada y en cuanto a la posibilidad de achacarle responsabilidad por los hechos que sirven de fundamento al libelo pretensor, es necesario determinar si se ha verificado el incumplimiento de sus deberes en la forma en que lo pretende el actor, cuestión que se verá en lo sucesivo del fallo, motivo por el cual no será oída la alegación de falta de legitimidad pasiva ya referida.

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCION OPUESTA POR LA DEMANDADA.

DECIMO PRIMERO: Que, en cuanto a la excepción de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual alegada por la demandada, fundada en que los hechos generadores de responsabilidad serían aislados y no continuos, que abarcarían desde el año 2007 al año 2019, haciendo referencia a que los daños estructurales achacados a la demandada, supuestamente vendrían desde el año 2011, al señalarse por los actores que los problemas generados en la vivienda en ese año, habrían traído como consecuencia un asentamiento de la cámara de ésta, de modo que habría transcurrido el plazo de cuatro años, por lo que toda acción que busque perseguir la responsabilidad de la demandada se encontraría prescrita; basta para su rechazo como se dirá, el consignar que los hechos acaecidos en los presentes autos habrían sido *continuos*, sufriendo los demandantes supuestas filtraciones de agua producto de problemas de matriz desde el año 2007, y en los años 2011, 2018, continuando hasta el año 2019, considerando también que el Decreto Alcaldicio de la I. Municipalidad de Alto Hospicio que dispuso la demolición total del inmueble de autos es de fecha 28 de agosto de 2017, y que la notificación de la demanda se efectuó con fecha 13 de octubre de 2020, de todo lo cual aparece que no ha transcurrido el plazo de prescripción establecido en el artículo 2332 del Código Civil; siendo preciso señalar que la responsabilidad civil, supone como requisito fundamental, la concurrencia del daño ocasionado por el hecho del que se pretende hacer responsable al demandado. En tales



condiciones, puede argüirse que el daño, y en particular la fecha en que se toma conocimiento del mismo, será siempre el elemento que determinará el momento en que se reúnan todos los elementos que exige la configuración del ilícito civil, haciendo nacer la obligación indemnizatoria y, por consiguiente, deberá exigirse la existencia del perjuicio para comenzar el cómputo de esta prescripción, puesto que sólo con el daño se completa el hecho ilícito. Debe inferirse entonces que la noción de "perpetración del acto" a que alude el artículo 2332 del Código Civil, no sólo comprende la ejecución de la acción sino también su efecto dañoso en la víctima, motivos todos por lo que no resulta posible acoger la excepción en comento.

EN CUANTO AL FONDO DE LA ACCION DEDUCIDA.

DECIMO SEGUNDO: Que a folio 1, comparecen don **MAURICIO HENRÍQUEZ BARRAZA** y don **ANGIELLO CORDANO CARRIZO**, abogados, en representación, de doña **MARCELA ACUÑA VISCAY**, y de don **ALEJANDRO BURGOS GENERAL**, quienes por los motivos señalados en la parte expositiva, interponen demanda de Indemnización de Perjuicios en contra de **AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**, representada legalmente por don **CHRISTIAN SAYEL BARAHONA RUBIO**, solicitando se condene a la demandada al pago de una indemnización total de **\$195.000.000.-** (Ciento noventa y cinco millones de pesos) o lo que este tribunal estime conforme a derecho, cantidad que se desglosa de la siguiente forma: la suma de **\$80.000.000.-** (ochenta millones de pesos) por concepto de daño emergente; la suma de **\$15.000.000.-** (quince millones de pesos) por concepto de desvalorización comercial inmueble, y la suma de **\$50.000.000.-** (cincuenta millones de pesos) para cada uno de los demandantes por concepto de daño moral, o lo que se estime ajustado a derecho, y que el monto indemnizatorio total que fije el fallo, sea reajustado desde la fecha de sucedido el hecho denunciado, hasta la fecha de pago efectivo, con costas.



DECIMO TERCERO: Que a folio 28, la parte demandada contestó la demanda solicitando su total rechazo, por los motivos pormenorizados en lo expositivo del presente fallo.

DECIMO CUARTO: Que la parte demandante a fin de acreditar su pretensión acompañó los siguientes medios de prueba:

a.- Documental:

A folio 63:

1.- Comprobante de atención emitido por la Superintendencia de Servicios Sanitarios de fecha 09 de mayo de 2018, y documentos varios anexos.

2.- Certificado de vivienda social N° 416/15 emitido el 01 de septiembre de 2015 por el Director de Obras Municipales de la comuna de Alto Hospicio.

3.- Decreto Alcaldicio de demolición N° 3.277/ 2017, emitido por Secretario Municipal, con fecha 28 de agosto de 2017, que dispone la demolición total de las edificaciones declaradas inhabitables e irreparables entre ellas, el inmueble de autos.

4.- Registro de egreso de enfermería correspondiente a doña Marcela Acuña de fechas 7 de enero de 2017, 25 de julio de 2016 y hoja de epicresis N° de ficha 60534.

5.- Carta dirigida a Aguas del Altiplano, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrita por don Alejandro Burgos General.

6.- Oficio ordinario N° 7272/2018, enviado por Jefa Oficina Regional de Tarapacá, Superintendencia de Servicios Sanitarios con fecha 16 de octubre de 2018.

7.- Carta de fecha 06 de octubre de 2015 emitida por don Alejandro Burgos General dirigida a la Directora Regional de Serviu Tarapacá.

8.- Carta respuesta emitida por Aguas del Altiplano S.A. con fecha 24 de mayo de 2018.

9.- Certificado de daños 065/2017 emitido con fecha 1 de agosto de 2017 por el Director de Obras Municipales de la comuna de Alto Hospicio, que declara el inmueble de autos en condición de inhabitable



e irreparable por daños sufridos en estructura vivienda, producto de asentamiento diferencial por socavamiento del terreno.

10.- Comprobante de atención emitido por la Superintendencia de Servicios Sanitarios Folio 20355583 de fecha 09 de mayo de 2018.

11.- Certificado de dominio vigente de la propiedad sub lite, emitido por el Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Iquique.

12.- Contrato de arrendamiento de fecha 20 de agosto de 2019 suscrito por Bernardo Cáceres Torres y doña Marcela Acuña Viscay.

13.- Informes psicológicos efectuados a los demandantes suscritos por el psicólogo señor José Parra Torres.

14.- Copia de correos electrónicos de fecha 22 de mayo y 13 de junio de 2018 enviado por doña Luz Ramírez Gutiérrez.

15.- Copia de orden de trabajo reparación arranques- unión domiciliaria, número de solicitud 270875, emitida por Aguas del Altiplano S.A. con fecha 27 de abril de 2018.

16.- Copia de correo electrónico de fecha 09 de julio de 2018 enviado por doña Paula García Carvajal. Asunto: Respuesta caso SISS C-746327.

En cuanto al documento signado bajo los N°8 y N°15 se tuvieron por acompañados bajo apercibimiento del artículo 346 número 3 del Código de Procedimiento Civil, y los restantes documentos acompañados con citación, no objetados.

A folio 64:

17.- Informe técnico de la propiedad siniestrada, denominado “Descripción de la obra a ejecutar informe técnico” emitido por el arquitecto señor Juan Carlos García Arenas en el año 2019, en el que se detalla y consignan los daños detectados en el terreno ocasionados por el colapso de suelos de fundación a un grupo de viviendas entre ellas el inmueble de autos, y propone solución habitacional a sus habitantes.

18.- Documento que da cuenta de proyecto de reconstrucción de vivienda afectadas por socavones suscrito por el arquitecto señor Juan Carlos García Arenas de abril de 2020.-



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FGXXGDQXWF

19.- Informe de suelos emitido en el mes de mayo de 2018, correspondiente a la propiedad siniestrada, suscrito por don Juan Pablo González, Ingeniero Civil.

20.- Set de 8 fijaciones fotográficas que dan cuenta del estado de la propiedad sub lite por la ocurrencia de los siniestros.

21.- Permiso de edificación de la propiedad sub lite emitido por el Director de Obras Municipales de la comuna de Alto Hospicio.

22.- Certificado de avalúo fiscal de la propiedad sub lite signado con el rol 6643-21 de la comuna de Alto Hospicio, de fecha 09 de marzo de 2022.

Todos los documentos acompañados con citación, no objetados.

A folio 79:

23.- set de 29 fotografías del inmueble siniestrado.

Documentos acompañados con citación, no objetados.

b.- Testimonial:

A folio 96, comparece don **Jorge Orlando Reyes Amigo**, Cédula de Identidad N°5.295.293-k, jubilado, con domicilio en calle Pan de Azúcar N°2823 de la comuna de Alto Hospicio, quien legalmente juramentado y examinado expone, que desconoce si antes de los años 2017 o 2018 hubo problemas, pues conoce a los demandantes desde esa fecha, y conoce la parte de la casa que ya estaba dañada, estructuralmente la casa estaba completamente colapsada, se produjo por la falta de estabilidad del piso, ya que el agua diluyó la sal del terreno ya que es salino, y los cimientos de la casa no estaban bien asentados en el tipo de preparación de buena calidad del terreno, y que por su experiencia, la preparación del terreno se hace en base a una excavación o calicata, sobre eso se hace una fundación y una sobre fundación, para separar el terreno salino por uno de buena calidad, y se completa con otro tipo de tierra, que se protege con un plástico especial y sobre aquel se hacen las fundaciones de hormigón para construir la casa, señala que desconoce las especificaciones técnicas que tuvo la empresa para construir la población. Declara que entiende que los daños



ocasionados fueron en base a escurrimientos de agua, que socavaron las bases del inmueble producto de fallas en las cañerías de alimentación de agua, y posteriormente las descargas al alcantarillado.

Señala que los daños fueron provocados por la fuga de agua, y al formarse un socavón, no existe otra alternativa a que se haya creado el daño. Declara que desconoce los montos de los perjuicios y también al no habersele pedido una cotización para la reconstrucción del inmueble, desconoce los montos para su reconstrucción, indica que no sabe en qué año comenzaron los daños.

A folio 96, comparece don **José Rodrigo Rebolledo Recabal**, Cédula de Identidad N°14.052.710-6, operador de equipos pesados, con domicilio en Kuwait Manzana 94 casa 2, Sector La Pampa, comuna de Alto Hospicio, quien legalmente juramentado y examinado expone, que durante una visita haciendo una reunión de colegio, el actor le mostró que estaba teniendo problemas con roturas de matriz, porque él también los había tenido en mi casa, posteriormente en otra fecha cuando estaban en su casa, por asuntos del colegio, le comentó que había tenido problemas de fisura en la casa y luego en una tercera actividad en su casa, le mostró los socavones que se habían hecho y que se notaba a simple vista, que eran temas de aguas, y que solo tiene conocimiento de los hechos ocurridos en el 2018.

Declara que a grandes rasgos el daño fue a la vivienda, y que sin ser experto, se da cuenta que es por tema de agua, que ellos se han visto afectados y se les nota afligidos porque se tuvieron que ir de su vivienda actual y arrendar, lo que es un perjuicio. Expone que a su parecer el daño fue por la rotura de matriz, producto del agua, todos saben que esto se está provocando en Alto Hospicio por los socavones que se están formando por el agua.

A folio 96, comparece don **José Miguel Parra Torres**, Cédula de Identidad N°15.011.880-8, psicólogo, con domicilio en Avenida Circunvalación N° 3550, comuna de Alto Hospicio, quien legalmente juramentado y examinado expone, que la señora Marcela presentó cuadros de ansiedad, debido a los daños estructurales que tuvo la



casa como consecuencia de las relaciones interpersonales y conflictivas entre la familia, ya que ella asociaba todas las discusiones que ocurrían en el hogar a la poca privacidad que tenían los integrantes de la familia, lo que según lo manifestado ocurrió en distintos años y en lo específico en el año 2018, que hubo una rotura de matriz de Aguas del Altiplano; agrega que don Alejandro manifestó estrés laboral, sentimiento de inferioridad y dificultad de autoestima, que las asociaba a las dificultades que tenían entre los familiares y luego en terapia, pudo visualizar que fue a causa de los daños que había sufrido la casa por la rotura de matriz, y que esto le consta debido al relato de don Alejandro y de doña Marcela, luego indica que el monto solicitado por los demandantes, los puede ayudar a amortiguar los daños provocados por la rotura matriz.

Y que el suscribió los informes que se acompañan en la causa y que pertenecen a los demandantes y contienen las situaciones ocurridas en los distintos años en que la propiedad se vio afectada, en atención a la psicoterapia breve que se llevó a cabo en los meses de abril a junio del año 2019, y que los daños sufridos por doña Marcela son crisis de ansiedad, sentimiento de fracaso, y en el caso de don Alejandro de estrés laboral, baja autoestima al no tomar decisiones para buscar un lugar donde pudieran tener la privacidad que tenían antes de los daños, desconociendo los montos de los daños demandados.

c.- Otros:

A folio 98, se lleva a cabo audiencia de **percepción documental**, decretada a folio 68, donde se reproducen 7 videos contenidos en un pendrive guardado bajo custodia N°390-2022, los primeros 6 videos son de fecha 27 de abril de 2018 de las 0:34 horas, 0:40 horas, 0:44 horas, 0:46 horas, 0:57 horas y 3:22 horas; y el ultimo de fecha 3 de mayo de 2018 a las 13:01 horas.

A folio 99 al 105, se lleva a cabo audiencia de **exhibición documental**, decretada a folio 68, respecto de los documentos requeridos por la demandante exhibir a folio 63, dejándose constancia



que los documentos solicitados bajo los N°1, 4, 5,6, y 7 no existen en poder de la demandada, exhibiéndose únicamente la copia de las bases definitivas de estudios tarifarios de la demandada y organigrama general de la misma.

A folio 74, 75,76 y 77, **se trajo a la vista expedientes digitales** de causas Rol C-3715-2018, caratulada “Gallardo y otros con Aguas del Altiplano S.A.” seguida ante el Tercer Juzgado de Letras de Iquique, y causa rol C-3033-2020 de este Segundo Juzgado de Letras de Iquique, caratulada “González con Aguas del Altiplano S.A.”.

A folio 93, se recibió **oficio de la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio**, que adjunta certificado de daños de la propiedad de autos declarándola no habitable, Decreto Alcaldicio que dispone la demolición del inmueble y otros documentos anexos bajo custodia N° 525-2022.-

A folio 123 y 136, se recibió **oficio de Serviu Tarapacá**, que adjunta enlace computacional donde se encuentran documentos técnicos pertenecientes a la beneficiaria Marcela Acuña Viscay, tales como planimetrías, especificaciones técnicas, memorias, presupuesto, contrato y certificados.

A folio 152, se recibió **oficio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios**, que da cuenta que existen 4 reclamos entre los años 2011 y 2018 y una participación ciudadana de uno de los demandantes, cuyos motivos principales se refieren a cobro en exceso, trabajos mal ejecutados o inconclusos en reparación de matriz y medidor, deficiencias en calidad de servicio y tiempos de atención cliente; y 2 requerimientos el 9 y 17 de junio de 2022 por anegamiento por agua servida de la vía pública y por hundimiento de terreno, ambos atendidos por la demandada dentro de los tiempos acorde con el decreto tarifario vigente.

DECIMO QUINTO: Que la parte demandada a fin de acreditar sus dichos acompañó los siguientes medios de prueba:

a.- Documental:

A folio 85:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FGXXGDXWF

1.- Copia del oficio Ord. N°73, de 9 de enero de 2014, suscrito por Superintendente de Servicios Sanitarios (S) Gabriel Zamorano Seguel, por el que se informa que la vida útil de las tuberías de PVC es aproximadamente de 50 años, estando diseñadas para resistir una conducción a máxima presión de trabajo.

2.- Manual Tuberías y Fittings HDPE, emitido por el fabricante DURATEC – VINILIT S.A, donde se consigna que la vida útil de las tuberías es superior a 50 años.

3.- Ejemplar de “Bases Definitivas Estatuto Tarifario empresa de Servicios Sanitarios Aguas del Altiplano S.A.”, elaborado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en la cual se establece el estándar de calidad medible asociado a los atributos relacionados con una atención de emergencias realizada con “prontitud” y en forma “permanente”.

4.- Manual de uso y Mantenimiento de la Vivienda, Región de Tarapacá, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, año 2007, donde señala que el norte de Chile tiene una gran cantidad de sales, las que son solubles, entre ellas, en la comuna de Alto Hospicio.

5.- Informe N°612.685-A, sobre Lineamientos para determinación de Colapsabilidad de suelos por disolución de sales del IDIEM, elaborado por Roberto Olguín, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Universidad de Chile, año 2010. En el cual se constata que los suelos salinos, especialmente en las comunas de Arica y Alto Hospicio, son esencialmente colapsables ante la presencia de agua, es decir, no sólo la que proviene de una filtración, sino la que proviene de regar, de las lloviznas, humedad por denominada camanchaca etc.

6.- Información geológica de la comuna de Alto Hospicio por SERNAGEOMIN a solicitud de Serviu Tarapacá, donde se analiza la composición de sales en la comuna de Alto Hospicio en relación al informe N°612.685-A.

7.- Ficha 16 elaborada por la SISS, “Suelos salinos colapsables: una amenaza latente”, donde se expone que existen tipos de suelo que se ven muy afectados por filtraciones y roturas, como los suelos



salinos colapsables, y señala cuáles serían las potenciales amenazas del mismo, y que se puede hacer.

8.- Manual del cliente, emitido por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

9.- Certificado de avalúo Fiscal primer semestre de 2022, del inmueble de propiedad de la demandante de autos, del que consta que registra un avalúo fiscal a este semestre de \$12.768.251.-

Documentos acompañados con citación, no objetados.

b.- Otros:

A folio 160, se puso en conocimiento de las partes **informe pericial**, suscrito por doña Natalia Borquez Burgos, Ingeniero constructor, que consigna que la propiedad de autos se encuentra bajo la cota de solera y nivel de calle, señala que el mejoramiento del suelo según los planos proyectados para la propiedad es de 1 mts., de profundidad, sin embargo se debe realizar estudio mas acabado del suelo para tener conocimiento de la profundidad en que puede tener problemas de salinidad, la cual existe en varios puntos del terreno, por lo que se recomienda estudio de mecánica de suelos, para poder proyectar mejor la base para edificar la propiedad.

DECIMO SEXTO: Que a folio 168, se decretó medida para mejor resolver, la cual se tuvo por cumplida respecto del Oficio a la I. Municipalidad de Alto Hospicio a folio 171, y respecto del Oficio a la Superintendencia Servicios Sanitarios, por fallida a folio 174.

DECIMO SEPTIMO: Que la responsabilidad extracontractual, se encuentra contenida en el artículo 2314 del Código Civil, que dispone: *“El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la penas que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.”* Señalando asimismo la doctrina, que quien haya cometido una acción dolosa o culposa que haya producido daño a un tercero, y existiendo un vínculo de causalidad entre el acto y los resultados dañosos, se deberán indemnizar los perjuicios ocasionados. Por lo anterior, es necesario precisar que son presupuestos de la responsabilidad extracontractual,



que deben concurrir de manera copulativa, los siguientes: **a)** Capacidad, e imputabilidad del hecho a su autor; **b)** Existencia de un hecho ilícito, ejecutado con dolo o con culpa; **c)** Existencia de un daño; **d)** Relación de causalidad entre el hecho generador y el daño ocasionado. Correspondiendo a la parte demandante su comprobación, conforme el artículo 1698 del Código Civil.

DECIMO OCTAVO: Que, para resolver la controversia, debemos tener presente que la concesión de servicios sanitarios, tiene por objeto permitir el establecimiento, construcción y explotación de los servicios públicos destinados a producir y distribuir agua potable, recolectar y disponer de las aguas servidas, conforme se desprende de los artículos 1 N°1 y 7 del D.F.L 382 del año 1988 Ley General de Servicios Sanitarios.

Por su parte, el artículo 34 del referido cuerpo legal, señala que el prestador estará obligado a controlar permanentemente y a su cargo, la calidad del servicio suministrado, al mismo tiempo, el artículo 35 establece que el prestador deberá garantizar la continuidad y calidad de los servicios, los que sólo podrán verse afectados por fuerza mayor, y establece categóricamente en su artículo 40, que el propietario del inmueble es obligado a la mantención de las instalaciones interiores domiciliarias de alcantarillado y agua potable, por lo que la red pública de distribución aparece sólo de responsabilidad del concesionario.

En tal sentido, el artículo 36 bis de la Ley en comento dispone: *“Será obligación de los concesionarios mantener el nivel de calidad en la atención de usuarios y prestación del servicio que defina el reglamento, el cual deberá estar basado en criterio de carácter general y haberse dictado antes del otorgamiento de la concesión.”*

Asimismo, se debe tener presente lo dispuesto en la misma ley pretéritamente mencionada, que en su letra a) define a la Instalación domiciliaria de agua potable como: *“las obras necesarias para dotar de este servicio a un inmueble desde la salida de la llave de paso colocada a continuación del medidor o de los sistemas propios de*



abastecimiento de agua potable, hasta los artefactos.”; luego en su letra c) define el arranque de agua potable como: “el tramo de la red pública de distribución, comprendido desde el punto de su conexión a la tubería de distribución hasta la llave de paso colocada después del medidor, inclusive”; y por último en la letra e) define las redes públicas de distribución de agua potable indicando que “son aquellas instalaciones exigidas por la urbanización conforme a la ley, inclusive los arranques de agua potable operadas y administradas por el prestador del servicio público de distribución, a las que se conectan las instalaciones domiciliarias de agua potable.”, y en su letra f) trata a las redes públicas de recolección de aguas servidas como “aquellas instalaciones exigidas por la urbanización conforme a la ley, incluyendo las uniones domiciliarias de alcantarillado, operadas y administradas por el prestador del servicio público de recolección, a las que se empalman las instalaciones domiciliarias de alcantarillado de aguas servidas.”

Por su parte, el artículo 99 del Reglamento de las Concesiones Sanitarias de Producción y Distribución de Agua Potable y de Recolección y Disposición de Aguas Servidas y de la Normas Sobre Calidad de Atención a los usuarios de estos Servicios, prescribe lo siguiente *“El prestador deberá tener en aplicación un programa permanente de mantención preventiva de sus redes de alcantarillado. Igualmente, el prestador tendrá la obligación de mantener disponible y sin interrupción la red pública para la evacuación de las aguas servidas provenientes de los inmuebles, de modo que tal red no produzca inundaciones, filtraciones, daños u otros efectos, salvo causa de fuerza mayor, desperfectos causados por el mal uso o ejecución defectuosa de la instalación domiciliaria no imputable a la empresa”.*

Por otro lado, el artículo 98 del mismo reglamento dispone: *“El sistema de distribución de cualquier servicio de agua potable deberá ajustarse a lo establecido en la norma chilena NCh 691 “Agua Potable – Conducción, Regulación y Distribución.*



En tanto, las referidas a los sistemas de recolección de aguas servidas deberán cumplir con la norma chilena NCh 1105 "Alcantarillado de Aguas Residuales - Cálculo y Diseño de redes".

Y por último, su artículo 122 señala que "Las concesionarias deberán contar con un procedimiento especial que permita con prontitud y en forma permanente atender las emergencias, de acuerdo a los estándares definidos en los respectivos procesos tarifarios."

DECIMO NOVENO: En consecuencia, acorde a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas, las empresas de servicios sanitarios tienen el deber de mantención permanente, preventiva, operativa, adecuada y oportuna de la red pública de distribución y recolección de aguas, con el objeto de evitar un perjuicio para la comunidad a la cual van dirigidas sus prestaciones.

VIGESIMO: Que dicho aquello, cabe referirse a los requisitos que hacen procedente la responsabilidad extracontractual demandada, así, respecto al primero de los requisitos citados, la capacidad de la demandada, al ser la capacidad la regla general en nuestro ordenamiento jurídico, y al no haberse alegado hipótesis de incapacidad alguna, se da por cumplido.

VIGESIMO PRIMERO: Que, en cuanto a la existencia de un hecho ilícito, del tenor de la demanda se desprende que los hechos que sirven de fundamento a la misma, estarían dados por la falta de mantenimiento y reparación de la matriz situada a la altura del inmueble ubicado en Calle 3 N°3977, que corresponde al sitio N° 23 de la manzana D, del Conjunto Habitacional Estrella del Norte I Etapa, de la comuna de Alto Hospicio, que habría provocado filtraciones y escurrimientos de agua desde el año 2007, generándose malos olores en el año 2011, que provendrían del alcantarillado compartido con el vecino, originándose la ruptura de cañería del medidor, produciéndose un asentamiento de la cámara del inmueble, colapsando posteriormente el medidor, con fecha 26 de abril de 2018 a raíz de una rotura de matriz, lo que habría originado una serie de socavones, causándose graves daños en la estructura del inmueble.



VIGESIMO SEGUNDO: Que, con la documental que obra en autos, valorada de conformidad al artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, en relación a los artículos 1700 y siguientes del Código Civil, en especial la Copia del certificado de dominio vigente del inmueble de autos; Comprobante de Atención Superintendencia Servicios Sanitarios N° 20355583 de fecha 9 de mayo de 2018; Ord. N°7272/2018 SISS de fecha 16 de octubre de 2018; Carta dirigida a Aguas del Altiplano de fecha 22 de mayo de 2018 y respuesta demandada de fecha 24 de mayo de 2018; Certificado de daños 065/2017 de la I. Municipalidad de Alto Hospicio de fecha 1 de agosto de 2017; Decreto Alcaldicio N°3277/2017 de la I. Municipalidad de Alto Hospicio de fecha 28 de agosto de 2017; Orden de trabajo reparación arranques-unión domiciliaria Aguas del Altiplano de fecha 27 de abril de 2018 N° de solicitud 270875, N° de cliente 9772931, es posible tener por establecido lo siguiente:

1.- Que doña **Marcela Sonia Acuña Viscay** es dueña de la propiedad ubicada en calle 3 N°3977, que corresponde al sitio N°23 de la Manzana D del Conjunto Habitacional ESTRELLA DEL NORTE I ETAPA de la Comuna de Alto Hospicio, inscrita a su nombre a Fojas 2441 número 3948 del Registro de Propiedad del año 2006, del Conservador de Bienes Raíces de Iquique.

2.- Que de acuerdo a certificado de numero N°357/2023, el Director de Obras Municipales de Alto Hospicio certifica que la propiedad sublite, se encuentra ubicada en calle Oficina Salitrera Delaware (ex calle tres) N°3977 que corresponde al sitio N°23 de la Manzana D del Conjunto Habitacional ESTRELLA DEL NORTE I ETAPA de la Comuna de Alto Hospicio.

3.- Que con fecha 27 de abril de 2018, la demandada realizó en el inmueble ubicado en calle 3 N°3977, reparación de arranque de HDP de 20 mmts., más reparación de ambos varales en cobre de ½, negándose a firmar el cliente, orden de trabajo N°270875, inicio de trabajo a las 01:15 y termino a las 02:10.



4.- Que con fecha 1 de agosto de 2017, la I. Municipalidad de Alto Hospicio, certifica mediante certificado de daños N°065/2017 que la propiedad de autos se encuentra en condición de inhabitable e irreparable, por daños sufridos en la estructura de la vivienda producto de asentamiento diferencial por socavamiento del terreno.

5.- Que con fecha 28 de agosto de 2017, la I. Municipalidad de Alto Hospicio, dispone mediante Decreto Alcaldicio N°3277/2017, la demolición total del inmueble de propiedad de la demandante doña Marcela Sonia Acuña Viscay.

6.- Que con fecha 9 de mayo de 2018, el demandante don Alejandro Burgos General, interpuso requerimiento ante la SISS mediante comprobante de atención N°20355583, con motivo de lo acontecido el 26 de abril de 2018, a raíz de la fuga del primer vanal medidor, y del no trabajo conforme efectuado por la demandada, y de los problemas filtraciones sufridos; la que con fecha 16 de octubre, respondió que entre el periodo de noviembre de 2015 a 15 de septiembre de 2018, la infraestructura sanitaria existente en la Población Estrella del Norte de la comuna de Alto Hospicio se ha visto afectada por 96 anomalías; 94 dicen relación con redes públicas y 2 con instalaciones interiores. De los 94 casos en 34 de ellos, la demandada no ajustó su actuar conforme decreto tarifario de calidad atención.

7.- Que con fecha 22 de mayo de 2018, el demandante don Alejandro Burgos General, ingresó reclamo por los daños ante la demandada, con ocasión de los problemas de filtración desde el año 2006 y del hecho acontecido con el medidor el 26 de abril de 2018, contestando la empresa sanitaria, que respecto de este último, se habría producido como consecuencia de un hecho absolutamente ajeno a la empresa, no obstante una vez ocurrida la situación, se llevaron a efecto las acciones de emergencia correspondientes, dentro de los estándares de atención, y que no asumirían responsabilidad por los daños alegados debido a que el inmueble se encuentra en una área de alta concentración salina, situación propicia para este tipo de



daños, cualquiera sea el origen del escurrimiento de agua, por lo tanto no ha existido por su parte responsabilidad derivada de alguna conducta negligente o dolosa.

VIGESIMO TERCERO: Establecido aquello, corresponde determinar la concurrencia del segundo presupuesto de la responsabilidad alegada, esto es, la existencia de un hecho ejecutado con dolo o culpa.

Cabe indicar que ello configura nuestro sistema subjetivo de responsabilidad civil, toda vez que, como enseña nuestra doctrina, la imputabilidad subjetiva que desencadena una responsabilidad subjetiva, se funda en la culpabilidad, factor psíquico, con sus dos variantes: la culpa y el dolo, a su turno, es menester señalar que la culpa es un factor de atribución de responsabilidad civil regulado en el artículo 44 del Código Civil, precepto que distingue tres especies de culpa (grave, leve y levísima) y dispone que “Culpa o descuido sin otra calificación, significa culpa o descuido leve”, por lo que, de conformidad con las disposiciones del Título XXXV del mismo cuerpo legal, las cuales no califican la culpa, hay que necesariamente concluir que el grado mínimo de negligencia requerido para configurar la responsabilidad pretendida es la culpa o descuido leve, que, según se desprende del referido artículo 44 en relación con las normas del mencionado Título XXXV, significa la falta de una diligencia o cuidado ordinario o mediano al desplegar la conducta dañosa.

El dolo por su parte, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 44 del Código de Bello, consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

VIGESIMO CUARTO: Que, así la prueba rendida sintetizada en los considerandos décimo cuarto y décimo quinto, y el mérito de los hechos establecidos en el motivo vigésimo segundo, valorada en forma legal, no permiten por medio de dichas probanzas a este Tribunal tener por acreditada la efectividad de los referidos eventos consignados en el considerando vigésimo primero, hechos fundantes de la demanda, y que en definitiva sirvan de base para determinar la



responsabilidad de la demandada en la supuesta falta de mantención y reparación de la matriz que habría generado los supuestos daños, puesto que no es posible determinar con claridad, si efectivamente ocurrieron las filtraciones de aguas descritas en la demanda, ni tampoco su fecha específica, sin perjuicio de lo señalado en Oficio Ord. N°7272/2018 SISS de fecha 16 de octubre de 2018 que rola a folio a 63, el cual indicaría que de los casos identificados, la demandada, en términos generales respecto de un porcentaje de ellos, no habría ajustado su actuar al nivel de calidad y atención comprometidos en su decreto tarifario, sin señalar a que hecho en particular habría correspondido, habida consideración que la parte demandante en su libelo indica la existencia de diversos hechos que no precisa, solo refiere que se han producido desde el año 2007 al 2010, incluso a la fecha de presentación de la demanda, luego en el año 2011 y por ultimo el 26 de abril de 2018, refiriéndose en relación a este último acontecimiento, que como consecuencia del colapso del medidor debido a una rotura de matriz, se habrían generado los supuestos daños alegados, no obstante que el inmueble sublite había sido declarado inhabitable conforme a certificado de daños 065/2017, con fecha 1 de agosto de 2017, disponiéndose su demolición total de acuerdo a Decreto Alcaldicio 3277/2017 de fecha 28 de agosto del mismo año por parte de la I. Municipalidad de Alto Hospicio, por consiguiente, solo uno de los hechos denunciados se encuentra con respaldo conforme a la documentación aparejada por los actores, siendo el que dice relación con reparación de arranque y reparación de ambos varales con fecha 27 de abril de 2018, no siendo suficiente para tener por configurado el segundo de los requisitos de la acción, pues no permite esclarecer las fechas, ubicación y en definitiva el origen de los hechos en que se funda la demanda.

VIGESIMO QUINTO: Que según lo razonado en los motivos precedentes, no habiéndose acreditado por los actores los hechos culpables, ni menos dolosos que se imputan a la demandada, resulta innecesario pronunciarse sobre los demás requisitos, por lo que esta



sentenciadora rechazará la acción, en todas sus partes, según se dirá en lo resolutivo del presente fallo.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170 y 342, y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 1698, 1700, artículos 2314 y siguientes del Código Civil, y demás normas pertinentes, **SE DECLARA:**

EN CUANTO A LA TACHA:

I.- Que, **SE RECHAZA** la tachá formulada por la parte demandada respecto del testigo don José Rodrigo Rebolledo Recabal a folio 96.

EN CUANTO AL FONDO:

II.- Que, **SE RECHAZA** la demanda de indemnización de perjuicios deducida en lo principal de folio 1, por don **MAURICIO HENRÍQUEZ BARRAZA** y don **ANGIELLO CORDANO CARRIZO**, en representación de doña **MARCELA ACUÑA VISCAY** y de don **ALEJANDRO BURGOS GENERAL**, en contra de **AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**, representada legalmente por don **CHRISTIAN SAYEL BARAHONA RUBIO**.

III.- Que no se condena en costas a los actores, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Anótese, regístrese y notifíquese personalmente o por cédula.

RoI 361-2019

Dictada por doña **PATRICIA ALEJANDRA SHAND SCHOLZ**, Juez Titular de este Segundo Juzgado de Letras de Iquique.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Iquique, cinco de Julio de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FGXXGDQXWF

